

Morena reacomoda su estructura rumbo a 2027; sindicatos escalan tensiones y el IMSS defiende cifras de empleo

El escenario político y laboral en México comienza a tomar forma de cara a los próximos años, con movimientos estratégicos en el partido en el poder, tensiones crecientes en el ámbito sindical y una defensa firme del gobierno federal sobre el comportamiento del empleo formal.

Uno de los movimientos más relevantes se dio al interior de Morena. La salida de Ariadna Montiel de la Secretaría de Bienestar no es un cambio administrativo más, sino una señal clara de reconfiguración política. Su posible incorporación a tareas partidistas apunta directamente al fortalecimiento de la estructura territorial del partido rumbo a las elecciones de 2027. En su lugar, Leticia Ramírez asumirá la conducción de una de las dependencias más sensibles del gobierno federal, encargada de operar los programas sociales que han sido eje central del proyecto político actual.

Este ajuste refleja una lógica que en términos políticos es simple: quien controla la operación territorial, controla la capacidad de movilización. Y en un escenario donde estarán en juego múltiples gubernaturas, Morena no está dejando cabos sueltos. Al mismo tiempo, sus aliados comienzan a mostrar señales de independencia. El Partido Verde, por ejemplo, ya puso sobre la mesa perfiles propios para futuras candidaturas, dejando claro que su participación en la coalición no será pasiva. Aunque públicamente se descarta cualquier presión, en los hechos el mensaje es otro: el reparto político será negociado, no concedido.

Mientras tanto, en el terreno sindical, el panorama es más delicado. En Puebla, la disputa por contratos vinculados a obra pública derivó en enfrentamientos violentos entre grupos sindicales. Lo que inició como una pugna por el control del transporte de materiales terminó con unidades incendiadas y ataques armados. No se trata de un conflicto aislado, sino de un síntoma más profundo: el control de contratos se ha convertido en un espacio de poder donde convergen intereses económicos, políticos y territoriales.

Aquí el problema no es solo la violencia, sino lo que representa. Cuando los sindicatos dejan la mesa de negociación y trasladan la disputa al terreno físico, el costo institucional crece. Las obras públicas, que deberían ser motores de

desarrollo, corren el riesgo de convertirse en focos de conflicto si no se establecen reglas claras y mecanismos de control efectivos. Es un punto donde la gobernabilidad laboral se pone a prueba.

En paralelo, el gobierno federal salió a fijar postura sobre el empleo formal, particularmente en torno al IMSS. Ante versiones que señalaban una desaceleración, se aclaró que existe una diferencia técnica entre las mediciones. Mientras la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo considera tanto empleo formal como informal, el IMSS registra exclusivamente puestos formales afiliados.

Los números oficiales indican que, al cierre de marzo de 2026, el Instituto alcanzó más de 22.7 millones de trabajadores registrados, con más de 200 mil empleos formales generados en lo que va del año. Además, el salario base de cotización mantiene una tendencia al alza. Más allá de la cifra, el mensaje es político: el gobierno busca consolidar la narrativa de estabilidad laboral en un contexto económico complejo.

El trasfondo de todo esto es claro. El país entra en una etapa donde lo político, lo sindical y lo institucional comienzan a alinearse —o tensionarse— con miras a los próximos procesos electorales. Morena ajusta su estructura para no perder control territorial, sus aliados buscan mayor peso en la toma de decisiones, los sindicatos disputan espacios de poder en obras estratégicas y el gobierno defiende sus indicadores clave.

No es casualidad que todo ocurra al mismo tiempo. Es la antesala de un ciclo político donde cada actor está tomando posición. Y como suele pasar, los movimientos más importantes no siempre son los más visibles, pero sí los que terminan definiendo el rumbo.